

EL ASALTO AL PEYOTE Y LA RESISTENCIA

Este sábado fue desplegado un operativo para arrancar la aprobación por asamblea de la ocupación temporal de 37.5 hectáreas al ejido El Peyote, respecto al *Entronque-75D Matehuala*. Lo que debió ser aprobado el 5 de abril y diferido por *Guardianes de la Sierra de San Miguelito*, quienes lograron en dicha asamblea diferir el acuerdo de entrega hasta este 25 de octubre del 2025.

101 votos y 40 abstenciones fue el resultado de un trabajo construido a base de la traición del hoy excomisariado Severo Rosales, la intervención del presidente municipal de Guadalcázar, operadores del Gobierno del Estado y con todos los recursos necesarios de la empresa concesionaria Infraestructura Potosina de Carreteras (del Grupo Meta).

“Desde que vino el Procurador Agrario Víctor Suárez, y se entrevistó con el secretario de Gobierno Guadalupe Torres, este lo condicionó a que se generaría diálogo entre empresa y el Ejido, siempre y cuando no participaran los *Guardianes*, porque lo calificó como un grupo de pseudos ambientalistas y farsantes”.

El traicionero ex comisariado de El Peyote, Severo Rosales, es de Morena y pertenece al grupo del huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, lo que no le impidió pactar con los enviados de la empresa y del gobierno del estado, incluso en algún momento intento involucrar despachos del huasteco en la negociación y usarlos como grupo para confrontar a los *Guardianes*.

El presidente Municipal de Guadalcázar, Gumaro Verdín Puente, se avocó a comprar a algunos simpatizantes del grupo opositor, quienes se dedicaron a desanimar y terminar de intimidar la base social inconforme.

“Una borrachera aquí, una cena allá, una promesa de trabajo por acá, toda la vieja escuela en acción, al representante de la Procuraduría Agraria lo persuadieron a colaborar, si te corren, acá tendrás trabajo en Gobierno del Estado o bien una jugosa compensación de la empresa”.

Los grupos del poder económico aliados del político construyeron una escuela funcional para controlar y someter al tejido social en los núcleos agrarios durante el llamado periodo neoliberal, y se han adaptado a las nuevas condiciones políticas del país. Sus estructuras se mantienen en parte del Gobierno Federal en secretarías clave y dependencias vinculadas al tema agrario, carretero, ambiental e hídrico por mencionar algunos, y si sumamos a un Gobierno Estatal que busca una proyección mas haya de un sexenio e incluso insertar el método populista de derecha del Gallardismo a nivel regional y nacional, entonces ejidos y comunidades en San Luís Potosí a la suerte del monstruo empresarial.

Así fue la compra de tierras en Garita de Jalisco, Aguaje, Rodrigo, Capulines, Emiliano Zapata-Jesús Maria, y una docena de ejidos privatizados a partir de 1993.

En 2018 el Gobierno Federal determinó frenar el cambio de destino de tierras y con la llegada de Victor Suárez a la Procuraduría Agraria se planteó un auténtico proceso para cambiar las reglas que siguen promoviendo el control del tejido social de núcleos agrarios a favor de grupos y corporaciones.

El mismo Procurador es un elemento incómodo para los grupos que desde el mismo gobierno promueven pactos y alianzas con los adversarios conservadores de una nueva visión agraria.

En San Luís Potosí, el Decreto del Área Natural de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito del 13 de diciembre del 2021 frenó radicalmente la urbanización de miles de hectáreas. Sin embargo, otros procesos siguieron adelante como es el tráfico de tierras en ejidos como la Pila y sobre todo la apropiación de tierras para carreteras, libramientos y autopistas, como es el caso de las diversas fases del libramiento poniente y demás trazos carreteros.

La ofensiva de Ricardo Salinas Pliego en Corcovada y la respuesta conjunta de Gobierno Federal y movimiento social fue contundente, rápida y exitosa. El gobernador del Estado Ricardo Gallardo no alcanzó a contra operar. Para el caso del Entronque 75D-Matehuala, con más tiempo y con una estrategia más desarrollada cree quien podrá lograr su objetivo.

Se lo dijimos a la presidenta Sheinbaum y sus colaboradores, se trata el Entronque 75D-Matehuala, de una parte, del rompecabezas de la derecha verde populista para acumular recursos y alianzas estratégicas en la perspectiva del 2030. En Corcovada no era una cementera, es un proyecto logístico de largo alcance y vuelo, que incorpora el libramiento Ventura Peyote, el Parque Eólico Joya Honda y diversos proyectos extractivos que van desde el litio, el titanio y el oro.

La falta de tablas, capacidad y experiencia de legisladores, la cooptación de funcionarios representantes de las Secretarías de Estado, como es el caso de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, han permitido a la Gallardía seguir creciendo y consolidando un proyecto que terminará confrontando al Gobierno de la Transformación.

LA RESISTENCIA

Guardianes de la Sierra sabíamos lo que sucedía, por eso preparamos el terreno para una batalla de largo alcance. Un dilema es hoy la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ante la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, pues el trazo invade parte del Área Natural Real de Guadalcázar y además de áreas con especies endémicas protegidas de conformidad a normas oficiales de estricta aplicación.

La ausencia de una propuesta de obra respecto al impacto social del proyecto, el involucramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cuestionamiento directo a los acuerdos de la asamblea del 25 de octubre pasado,

la judicialización, así como la revisión del actuar del representante de la Procuraduría Agraria en San Luís Potosí.

El movimiento planteaba el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales del proyecto, y en contrario sentido las huestes de la imposición promovieron la mentira, la simulación, el conformismo, el linchamiento, la violencia y la intimidación. No se trataba de destruir, se buscaba redefinir las formas de negociar por el bien de los ejidos y comunidades, ahora la empresa y gobierno estatal determinaron el camino para la cancelación de la autopista verde.

¿Imposible? Así dijeron del Área de Protección Natural Sierra de San Miguelito y de diversas batallas por el territorio.

En unos días la empresa pagará a 70 pesos el metro cuadrado, y en unas semanas no existirá un peso en los bolsillos de ejidatarias y ejidatarios. En dos meses empezaran los arrepentimientos, a nadie le importara en El Peyote ya si el proyecto funciona o no. Y entonces veremos de que está hecha en términos de congruencia social, legal y ambiental esta Cuarta Transformación, respecto a un proyecto sin soporte hídrico, ambiental y social.